

Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad

Martín Cortés*

“Se puede decir que todo lo que pasa por mano del Estado se transforma en materia estatal”

René Zavaleta Mercado

Presentación

El propósito del presente trabajo es analizar la relación entre Estado y conflicto social en la Argentina contemporánea, particularmente a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación. La misma ha supuesto una serie de transformaciones en el mapa de los movimientos sociales y organizaciones políticas de acuerdo a su posicionamiento respecto de diversas medidas y de la orientación general del gobierno. A diferencia de la década del noventa, donde, frente a las políticas neoliberales había un consenso opositor entre el más amplio espectro de expresiones de los sectores subalternos, la emergencia de un gobierno de tinte “progresista”, produjo rupturas y reconfiguraciones en la medida en que las políticas del nuevo gobierno eran tomadas, por algunos sectores, como afines a sus propios horizontes políticos. En este sentido, introducimos un análisis del recorrido del Movimiento Barrios de Pie (en adelante MBP) en su relación con el Estado. Nuestro interrogante parte de las posturas aparentemente opuestas que el movimiento esgrimió entre su férrea resistencia a las políticas neoliberales hasta el 2003 y su afinidad con el presente gobierno. El estudio del caso pretende demostrar que no se trata meramente de una contradicción que pueda leerse como el abandono de las posiciones ideológicas previas sino de un proceso condicionado por una serie de factores ya presentes en su identidad que abren la posibilidad de que se establezca una relación afín con el gobierno de Néstor Kirchner. A su vez, el alcance de este análisis no se agota en el caso específico del MBP, sino que busca remarcar la complejidad involucrada en la relación entre expresiones de protesta y organización de los sectores subalternos y las instancias institucionales, con el fin de evitar caer en maniqueísmos que pueden tener considerables consecuencias políticas.

Para emprender esta tarea -y teniendo en cuenta cierta “vacancia” teórica de trabajo en el tema-, consideramos necesario comenzar estableciendo el modo en que concebimos la articulación entre el Estado y el conflicto social en el capitalismo, echando mano de algunas nociones críticas de Teoría del Estado, teniendo en cuenta, a su vez, la especificidad de este problema en las formaciones sociales latinoamericanas, a partir de algunas investigaciones clásicas sobre el Estado en la periferia capitalista. El objetivo de este recorrido es enmarcar el análisis de caso en una indagación que pretende abordar la complejidad de los desafíos que el Estado impone a las luchas emancipatorias en la medida en que no se lo conciba como mero instrumento de las clases dominantes y se incorpore su dimensión productiva y articuladora. En esta primer parte, entonces, desarrollaremos la noción de *institucionalización*, estableciendo por medio de ella la capacidad estatal de enfrentar el conflicto social y ponerlo en sus propios términos, adecuándolo a las necesidades de la sociedad capitalista. A su vez, el recorrido por algunas de las particularidades de las formaciones sociales “secundarias”, tal como Marx las llamaba, dará cuenta de condiciones particulares en que esto sucede.

Ahora bien, el hecho de que sean *particularidades* supone que, como tales, estructuran el campo de la disputa social en su conjunto. Las peculiaridades del Estado periférico, fuerte (articulador de las identidades sociales) y débil (limitado en su capacidad de incidir en la reproducción del capital) en un mismo movimiento son las

bases sobre las que se asienta la lucha social a escala nacional. En tal sentido, un repaso por ellas es imprescindible para analizar la trayectoria de un movimiento social que allí se inscribe.

De esta manera, el abordaje de las prácticas del MBP estará orientado hacia su relación con el Estado, intentando dar cuenta de las transformaciones en esta relación a la luz del marco teórico y de las hipótesis generales del trabajo. Estas están centradas en la noción clásica de *autonomía*, tanto respecto de las clases dominantes como del Estado, como la garantía para la radicalidad de los procesos políticos. El meollo de la reflexión redundará, así, en la articulación entre aquel concepto y las condiciones particulares del caso analizado, prestando particular atención a la *afinidad* que se produce entre un movimiento y el Estado a partir de determinadas políticas emprendidas por un gobierno.

Introducción: ¿Qué es el Estado?

Como marco general, este trabajo parte de la concepción clásica de Estado al interior del marxismo, presente en Engels (1970) y Lenin (1974), como aparato que surge de la sociedad civil allí donde conviven clases con intereses irreconciliables, en pos de reconducir la violencia presente en ella, y permitir la propia subsistencia del tejido social *qua* capitalista. Esto no implica neutralidad sino cierta distancia de las clases en pugna. El propio Engels define al Estado como “capitalista colectivo ideal”, dando cuenta tanto de su carácter burgués como de su racionalidad diferenciada respecto de la lógica del capitalista individual. En un sentido amplio –soslayando sus formas históricas–, su rol es esencialmente conservador, se trata de mantener el *estado* de las cosas, de preservar los límites externos de la sociedad. En una sociedad sustentada en la dominación de clase, esto implica necesariamente una toma de posición, por la persistencia de dicha relación en el tiempo. Vale decir, el Estado vela por la reproducción de ambos polos de la relación capital-trabajo, pero en cuanto tales (el trabajo como *fuerza de trabajo* subsumida al dominio del capital), aún cuando esto pueda ir en contra de intereses inmediatos de la clase dominante¹. De esta manera, el Estado se constituye como una dimensión central de las relaciones sociales capitalistas, como la instancia propiamente política que asegura las bases para la reproducción de la sociedad. Sin embargo, esta relación social se cristaliza en aparatos de Estado que expresan una correlación de fuerzas en el seno de la sociedad, por lo que no deben ser percibidos como un ente monolítico sino como un campo de disputa (Thwaites Rey, 2005)². Una disputa que sin dudas es asimétrica, ya que, por lo dicho, no se trata de una instancia neutral a ser “ocupada”, sino de una dimensión de la sociedad capitalista que, por ello, es parte del problema de la dominación burguesa. Ahora bien, esta complejidad es central a la hora de desarrollar estrategias políticas que trasciendan lecturas simplistas de lo real, por lo que constituye, en última instancia, el campo donde se inscriben las luchas sociales y, por ende, el objeto de nuestro trabajo.

De este modo, la distancia entre el carácter de garante de una relación y la identificación inmediata con una clase es de tamaño importancia para el tema que nos ocupa. En ese espacio se desarrollan las respuestas del Estado a una sociedad en permanente conflicto. Es allí donde aparecen las huellas de esa violencia que le dio lugar pero que debe ser negada para que el orden pueda postularse como tal.

¿Cuál es la relación del Estado con su violento origen? Antes, ¿en qué sentido puede hablarse de origen y no de permanente constitución o, más bien, institución de un orden? Esta es una primera cuestión crucial, al igual que con la tan mentada “acumulación originaria”³ en tanto separación del trabajador respecto de los medios de

producción, el nacimiento del Estado no debe pensarse como un hecho concluido y enterrado por la historia, sino como un permanente ejercicio de dominación, en el que se define la propia forma de existencia de una sociedad. De esta manera, lo más importante de la concepción engelsiana no es tanto la ubicación del “primer” Estado en la lejana disolución de las *gens* sino la intensidad con la que es definido el vínculo intrínseco entre violencia y Estado, en la idea de la violencia como fundadora de juridicidad (desarrollaremos esto luego). En Marx (1967) esto también aparece cuando el Estado es definido como “síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma de Estado”. Esto implicaría, en una primera lectura, un límite fundante en la relación que los sectores subalternos pueden establecer con el anterior en su búsqueda emancipatoria.

En este punto cabe adelantar que la compleja y contradictoria relación entre Estado y Protesta Social (o, en un sentido más amplio, diversas expresiones de organización de los sectores populares) oscila, a grandes rasgos, entre la cooptación³ y la represión, en base al nivel de organización de los sectores subalternos y a las capacidades materiales y simbólicas del Estado de afrontar determinadas demandas que le son presentadas. En este sentido, la represión del conflicto social, que puede contener diversas estrategias⁴, es también indicativa de una correlación de fuerzas determinada y, del mismo modo que la cooptación, de la forma en que un gobierno expresa una relación estatal con el conflicto social. De acuerdo con esto, afirmaremos que tanto la cooptación como la represión, constituyen formas de institucionalización del conflicto social, ya que dan cuenta del modo en que una demanda sectorial es canalizada en el andamiaje estatal, ya sea mediante su inclusión o su forzoso silenciamiento. Consideramos que en la forma en que estos dos mecanismos son desarrollados (cómo y a quién son dirigidos) y balanceados entre sí, descansa una importante medida de la relación que se establece entre el Estado y las diferentes expresiones de protesta social en un determinado momento histórico.

Una serie de reflexiones previas nos conducirán hacia los problemas aquí planteados, de manera de delinear supuestos teóricos que puedan sustentar su presentación.

Estado y Sociedad

La existencia del Estado como entidad diferenciada de la sociedad es posible en la medida en que el conflicto es parte de la misma. La violencia supone la existencia de fuerzas enfrentadas, el Estado supone la inscripción jurídica de dicho enfrentamiento. La política, de acuerdo a la fórmula en que Foucault (1992) invierte a Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios. Este proceso (el nacimiento de la política como instancia específica) vuelve tolerable y legítima una violencia ya inscrita en lo social. Benjamin (1995) distingue entre la violencia históricamente reconocida como poder (el Estado) y la violencia no aceptada, aquella capaz de transformar, de producir nueva juridicidad. De esta manera, el Estado sanciona la violencia que no domina porque teme su carácter de creadora de derecho y fundadora de un potencial orden diferente. Buena parte de la teoría política moderna, entonces, es un “largo y prolijo ocultamiento de esta violencia como fundación y sostén del poder político” (Gruner, 1997: 38). De esta manera, la violencia que es negada retorna concentrada en un “sujeto” específico que es el Estado.

La relación entre violencia social y Estado no es un pacto cerrado en el origen, sino más bien una permanente disputa. Intentaremos demostrar que esa disputa, por parte del Estado, consiste en la inclusión del conflicto social dentro de sus parámetros, de

manera de evitar que aquél lo exceda. Por su parte, la lucha de los sectores subalternos es un intento por trascender dicha forma y fundar nuevos modos de sociabilidad.

En el Estado moderno, la concentración de la violencia no es el único elemento que lo enfrenta a la sociedad como un órgano superior a ella. O, dicho de otra manera, aquella toma también la forma de instituciones con diversas funciones que hacen del espacio estatal el principal terreno de resolución de los conflictos de la sociedad civil que, de acuerdo a lo antes dicho, se resolverán siempre en un sentido de perpetuación de la sociedad y el Estado donde se producen. De este modo, la idea de que el plano estatal se resuelven los problemas *generales* (esto es, abstraídos de su carácter de clase) de la sociedad, produce la apariencia de que sus instituciones se encuentran desvinculadas de determinaciones de clase.

Si el Estado presenta un carácter *general* frente a las *particularidades* de la Sociedad Civil, no puede desvincularse de que su soberanía es siempre representación de la anterior. Sin embargo, no se trata de una representación transparente sino más bien de un proceso de alienación de la soberanía popular (Vega, 1984) y, por consiguiente, de una permanente lucha de las clases subalternas por la recuperación de ésta. Intentaremos ahora comprender de qué manera se constituye esta disputa.

Sujetos políticos

¿Cuál es el proceso de constitución de un sujeto político en una sociedad en conflicto? Partimos de que es -por su naturaleza- contradictorio, ya que la subjetivación implica la sumisión a una ley que la precede (la clase obrera se subjetiva en tanto explotada) pero al mismo tiempo el sujeto que surge cuenta, como tal, con posibilidades de transformación del orden existente. En el caso de la sociedad capitalista, esa ley es *el capital*, entendido como una relación social de dominio que otorga roles que la reproducen como tal. Ahora bien, en el orden político, este dominio está mediado por el Estado, que aparecerá como un conjunto de aparatos y normas a través de las cuales los sujetos son integrados y diferenciados en un mismo movimiento. De esta manera, éste aparece en una doble dimensión, como un órgano *superior* a la sociedad, con capacidad de dominio sobre ella y como un *orden* presente al interior de ella. Esto implica, a nuestros efectos, que el Estado está siempre presente en el conflicto social. Actúa para con él de manera visible (represión-cooptación) pero también de manera imperceptible, siendo expresión institucional del mismo. Entonces, los sujetos sociales no “politizan” sus enfrentamientos sólo cuando se relacionan directamente con la disputa por el poder de Estado, sino que son expresiones ya políticas que reproducen por medio de su existencia un orden eminentemente conflictivo.

En este sentido, la relación entre el Estado y un movimiento social (o, en última instancia, cualquier actor que lo interpele) no debe concebirse en términos de exterioridad, sino como partes integrantes de la política como escenario de conflicto que se constituyen y transforman allí. Esa interacción no es simétrica, claro está, ni el carácter relacional atenúa las diferencias de poder, pero lo que aquí intentamos subrayar es la necesidad de pensar la relación entre conflicto social (en cualquier sentido que se lo tome) y Estado siempre como ya existente, y nunca como una opción.

En esta dirección, Lechner (1984) propone pensar a la sociedad, el sujeto, el Estado y la política como momentos de un mismo movimiento. Ese movimiento, agregamos, es el capital como relación de dominio, esto es, como frontera o límite al interior del cual estas categorías se articulan y sólo de manera ocasional rebasan. La distinción entre estos momentos en términos de sus peculiaridades es central para el tema de esta investigación. Los sujetos sociales se constituyen en tanto particulares. Esto

implica la existencia de un otro como diferente (u opuesto, términos dependientes de los grados de polarización y/o enfrentamiento al interior de una sociedad) y el alcance y delimitación de objetivos *proprios* distintos de los *ajenos*. Aquí cabe pensar una diferenciación central entre la política y el Estado. La primera correspondería a una disputa por hacer prevalecer los mencionados objetivos. Sería, en tal caso, un momento inherente a la existencia de conflicto, aunque no necesariamente en términos de clases con intereses objetivamente contrapuestos. El Estado, por su parte, se constituye como generalidad. Esto no implica neutralidad en el plano de la política sino más bien una “síntesis” de aquel, una preservación de los términos en los que es planteado (la tendencia a la perpetuación de los sujetos que componen la disputa). Esta síntesis, consideramos, tiene como expresión práctica el movimiento que denominamos *institucionalización*.

Institucionalización

Una vez establecidas algunas delimitaciones de la relación Estado-Conflicto Social en el modo de producción capitalista, el problema de la institucionalización remite a las formas concretas que ésta asume. En este apartado intentaremos desarrollar el mencionado proceso estatal de mediación del conflicto social, dando cuenta de algunos de sus fundamentos y mecanismos centrales.

Denominaremos a estos mecanismos *formas de tratamiento*, ya que, nos parece, implican centralmente un proceso que puede dividirse (analíticamente, aunque no en el plano de lo observable) en una entrada, un tránsito y una salida, de manera que un problema presentado al Estado es, más allá de su parcial solución, siempre reconfigurado, *tratado* de forma tal que sus aristas más incompatibles con el orden existente sean modificadas o, en su defecto, amputadas.

El fundamento de la institucionalización lo debemos encontrar en las funciones inherentes a los aparatos de Estado. Si antes recorrimos consideraciones generales en torno al Estado como relación social constitutiva de la sociedad capitalista, aquí intentaremos trazar la especificidad de los aparatos de Estado en lo que al conflicto social refiere.

En primer lugar podemos afirmar que los aparatos de Estado cuentan con un rol preponderante en la reproducción de las relaciones sociales capitalistas (Althusser, 1997). En términos más concretos, sus funciones se orientan hacia la unificación del bloque dominante y la desorganización y división de las clases dominantes “polarizándolas hacia el bloque en el poder y cortocircuitando sus organizaciones políticas propias” (Poulantzas, 1991: 169). Esta actividad propia del andamiaje estatal se sustenta en la manera en que se *enfrenta* a la sociedad civil. La individualización propia de las relaciones de producción capitalistas (la concepción del hombre como elemento aislado, apéndice de la maquinaria en el proceso productivo) es el elemento en donde se enraíza la materialidad del Estado. Sus aparatos son moldeados para ejercer el poder sobre un conjunto así constituido, por lo que su marco no permite reconocer otras formas. De esta manera, cumple una función permanente de fraccionamiento de lo social. Desarrollaremos luego algunos conceptos sobre la administración pública que pueden leerse como la individualización *en movimiento*, es decir, practicada cotidianamente por el Estado.

Therborn (1997) plantea este problema en términos de *canalización*. El carácter de clase inscripto en los aparatos de Estado imprime una forma de mediación (no arbitraje sino ejercicio del poder de clase a través del Estado) del conflicto por medio de la cual el Estado tiende a *normalizar* las peticiones y protestas de las clases dominadas.

Existen múltiples formas de mediación relacionadas con la capacidad del Estado de centralizar el poder de clase y, al mismo tiempo, de totalizar a todas las clases en su seno. A los efectos de nuestro trabajo, el desplazamiento o canalización aparece como la forma clave de lo que denominamos institucionalización. Se trata de la canalización de las demandas populares a través de instituciones y procesos que no provoquen rupturas en el orden dominante. De esta manera, se encuentran canales *seguros* para que las contradicciones no debiliten el dominio.

La forma propia de canalización del Estado capitalista es la constante creación de *alternativas intrasistémicas* al conflicto presentado. De esta forma, las contradicciones son transformadas hacia dilemas solubles dentro del orden existente. Este proceso no es de ninguna manera una desviación consciente por parte del Estado, sino que los propios canales institucionalizados de presentación de demandas suponen una serie de pautas siempre compatibles con el carácter de clase del Estado. Ahora bien, de lo que se trata es de canalización de energías populares, por lo que no debe concebirse a esto como un proceso cerrado. Se trata, más bien, de una permanente disputa por exceder el plano de la normalización que el aparato estatal propone.

Para desarrollar este punto, Holloway (1994a) propone una interesante relación entre ciudadanía y administración pública. La teoría y la práctica de la administración pública tienen como supuesto el concepto moderno de ciudadanía, en el sentido de la igualdad formal y la individualización antes descrita, esto es, que la sociedad es una masa de ciudadanos (abstraídos de su condición de clase). De esta manera, contribuyen al proceso de fragmentación de la lucha de clases, ya que ésta es redefinida en términos de demandas ciudadanas.

Entonces, todas las prácticas transformadoras (se dirijan o no al Estado) son absorbidas y tratadas en estos términos. Si lo que ingresa al moderno entramado institucional es la lucha de clases, su producto principal es una masa indiferenciada de ciudadanos. De esto se trata la institucionalización del conflicto social. En el caso de cualquier conflicto puntual que plantee cuestionamientos (conscientes o no) profundos al orden existente, este verá sus aristas peligrosas amputadas y su núcleo *normalizado* por las diferentes dimensiones del Estado. Por caso, el sistema judicial no admite presentaciones colectivas y, si lo hace, nunca se da en términos de clase. Tan solo reconoce grupos de individuos, y no relaciones clasistas que los preceden. De la misma manera, el sistema político supone una serie de normas y procedimientos que orientan las prácticas partidarias más hacia la búsqueda de votos ciudadanos que hacia la expresión o representación de un interés de clase.

Sin embargo, el problema del *tratamiento* no debe reducirse solamente a las demandas que recibe el Estado sino a la forma misma en que éste concibe la problemática social. Pensemos por ejemplo en los términos de la asistencia social propios del Estado y su relación con momentos de conflicto. Es fácilmente asociable el aumento en los montos de ayuda con la multiplicación de las protestas, conflictos y activación de los sectores populares (el ejemplo más cercano y concreto quizá sea la explosión de Planes Jefas y Jefes de Hogar los primeros meses de 2002). Al margen de que todo logro siempre debe ser pensado en términos de conquista y no sólo como concesión por parte de las clases dominantes, debe resaltarse que la ayuda social supone términos que por sí mismos tienden a la desarticulación de las organizaciones propias del campo popular. En otras palabras, prácticas que muchas veces no son dirigidas hacia el Estado y que otras, si lo son, no son reductibles solamente a un problema material, son reconfiguradas en términos de medidas cuantificables de la “necesidad” (la estadística y sus instituciones –como el INDEC en el caso argentino–, entonces, suponen ya una matriz de tratamiento del conflicto social). De esta manera, la búsqueda, sin duda

material y atravesada por la crisis económica, que puede trascender la inmediatez y pensarse como producción de nueva subjetividad y transformación de relaciones sociales es reconducida hacia los términos propios del Estado⁵.

Estos mecanismos, entonces, podrían englobarse en un doble movimiento propio de la práctica estatal, denominado por Holloway (1994b) *proceso de Individuación-Colectivización*. El mismo consiste en la disolución de un colectivo antagónico y clasista en átomos dispersos e indiferenciados para su posterior reunificación en agrupamientos de carácter no peligroso para el orden existente (los “ciudadanos” o la “nación” pueden funcionar en este plano). El núcleo del proceso es su adaptación a los términos de la sociedad actual. Un caso, polémico, de procesos de institucionalización de esta índole está dado por el recorrido del problema de los Derechos Humanos en nuestro país. Si en los principios de los ochenta suponía una problemática radical de fuerte cuestionamiento al orden social, muchos de sus términos y organizaciones fueron decantando hacia agencias como Secretarías de Derechos Humanos (hoy presentes en casi todos los planos de gestión pública del país)⁶.

Algunas cuestiones específicas del Estado en Argentina y América Latina

Los textos fundacionales del marxismo poco dicen acerca de América Latina, menos aún de las particularidades de su dimensión estatal. La noción marxiana, presente en los *Grundrisse*, de “formaciones secundarias” remite a una cuestión no menor: el desarrollo del capitalismo en regiones periféricas no responde a un proceso de desenvolvimiento de contradicciones sociales en sus territorios sino a una *implantación* desde fuera, lo que supone que varios determinantes específicos del modo de producción capitalista no están presentes y deben ser articulados de manera *artificial*. En este marco, el Estado es el elemento saliente que garantiza la posibilidad de desarrollo capitalista, determinando su posición fundante en la totalidad social no solamente en aquel momento primigenio sino de manera permanente, más allá matices históricos y geográficos.

El Estado en América Latina es ante todo contradictorio, es fuerte y débil en un mismo movimiento. En el primer caso, tiene un peso decisivo en la articulación de la formación social en su conjunto. Siguiendo a Zavaleta Mercado (1988), en América Latina el Estado no puede situarse vulgarmente en la “superestructura”, es más bien una activa fuerza productiva, la precondition para la producción de una base económica capitalista. Dado que la Nación no es, a diferencia de Europa, preexistente al Estado, tampoco aparece un mercado nacional como base para el nacimiento de éste. De hecho, tanto el mercado como la Nación (en términos de pautas culturales comunes) son creaciones *ex novo* del Estado. Hasta la burguesía es prácticamente inexistente como tal en los momentos de conformación del Estado nacional. En situaciones “normales” el Estado es producto de la Nación, vale decir, del mercado nacional en franca constitución. No son procesos exentos de violencia (la violencia es, tal como escribió Engels, la “partera” de la nueva sociedad que brota de las entrañas del viejo orden), pero tampoco son productos directos de ella. En el caso de muchos Estados latinoamericanos, no es este el proceso⁷. Pues no se trataba simplemente de abrir el camino a un proceso social conflictivo sino más bien de introducir determinadas condiciones externas al desarrollo endógeno de las formaciones sociales latinoamericanas. El Estado es productor y precondition del mercado, y luego garantía extra económica del funcionamiento correcto de los roles al interior de éste (Zavaleta Mercado, 1990).

Esta “productividad social” del Estado no se liga solamente a las clases dominantes sino a la articulación de la sociedad en su conjunto, por ello también a los sectores subalternos, cuya identidad está atravesada por la constitución de lo nacional

desde el Estado. Si bien este proceso fue históricamente posterior (ligado a los *populismos*), no por eso es menos fundante del tipo de sociedad periférica, donde la idea de Nación, e incluso el Estado, aparecen como significantes centrales de las luchas sociales. Aricó (1982) explica el desencuentro de Marx con América Latina en parte como producto de estas cuestiones. Su herencia hegeliana, tanto en un sentido positivo como negativo habría determinado el campo de lo visible en sus análisis: en sentido positivo, Marx parece fuertemente influenciado por la idea de *pueblos sin historia* de su viejo maestro. Esto hace que los países de la región no sean analizados en profundidad sino como apéndices del capitalismo central. En un sentido negativo, el rechazo de Marx al Estado-centrismo hegeliano, le impide siquiera pensar en el Estado como posible productor de la sociedad civil, y no como producto de ella. El hecho de que el desarrollo del capitalismo en América Latina no sea endógeno, y sus consecuencias sobre las instancias que deben impulsarlo dadas dichas circunstancias, no son profundizadas por Marx, quien centra sus escasos papeles sobre la región en críticas, algo apresuradas, a los proyectos “estatistas” de Bolívar.

Asimismo, el Estado periférico cuenta con una debilidad estructural como producto del mismo proceso histórico. Allí lo político es una esfera privilegiada, decisiva en la reproducción de la dominación. Ello se debe a que las contradicciones propias de la sociedad capitalista no son resueltas ni opacadas a otro nivel. Los debates de las décadas del sesenta y setenta (incluso hasta los tempranos ochenta) relacionaban el permanente “estado de excepción” (dictaduras militares y demás formas políticas autoritarias) de la región con esta problemática: la imposibilidad de resolución de conflictos inherentes a la sociedad capitalista en el ámbito de la sociedad obligaban a un permanente disciplinamiento coactivo. Aún cuando hoy haya que repensar esta cuestión a la luz de la “transición democrática”, las condiciones que estructuran la forma de existencia del Estado periférico persisten. Según el trabajo clásico de Tilman Evers (1989) la heterogeneidad estructural (coexistencia de diversas formas de producción) y la dependencia subordinada del mercado mundial -denominada por Sonntag (1977) “bidireccionalidad de la relación capital” por la fuerte presencia de capitales metropolitanos en las relaciones nacionales de clase- son las dos determinaciones centrales de las formaciones secundarias. Ellas producen un Estado que no sólo debe garantizar condiciones para la producción capitalista sino también imponerlas, bajo la presión de un capital extranjero que no precisa del desarrollo integral del país sino que persigue la obtención de ganancias en el corto plazo. De esta manera, conviven intereses dominantes difíciles de conciliar bajo la forma de un *interés general*, lo que da lugar a una paradoja: “de la imposibilidad de una política auténticamente “general” resulta una *ampliación potencial* de la autonomía estatal” (Evers, 1989:127, cursivas en el original), donde el Estado termina por ser la instancia privilegiada de disputa entre diversas fracciones burguesas.

Lo central de estos aportes para el trabajo que nos ocupa es la centralidad que el Estado asume como *lugar* de la disputa social. En una primera instancia es ante todo una pugna entre sectores dominantes, ya que las desfavorecidas burguesías locales apelan al marco nacional para legitimar sus pretensiones hegemónicas. De ese modo, se producen momentos históricos de interpelación a los sectores populares para reforzar su posición, sobre todo en momentos en que la relación entre fracciones dominantes locales y externas alcanza picos de tensión. Asimismo, esto debe pensarse dialécticamente -y, por ende, como disputa-: no se trata solamente de burguesías locales llamando a las masas a apoyarlas sino también de la activación efectiva de éstas y la búsqueda de las clases dominantes de un modo de canalizar esa energía sin poner en riesgo el sistema en su conjunto.

Aunque no es tema específico de este trabajo -y por ende no ahondaremos en él- este problema nos remite a las experiencias denominadas “populistas” y, en particular para el caso argentino, al peronismo. De algún modo, es la experiencia fundacional de la relación entre sectores subalternos y Estado. No porque antes no haya existido, sino porque se trata de un momento histórico que funda una relación *de nuevo tipo* y que, además, es constitutivo del acervo de tradiciones de las luchas sociales que se dan posteriormente. La fuerza del vínculo que se estrechó entre las organizaciones sindicales (alrededor de las cuales se nucleaba la abrumadora mayoría de la clase trabajadora argentina) y el Estado no fue sólo de orden económico, sino que abarcó la sociabilidad cotidiana de los trabajadores (Merklen, 2005). De esta manera, la identidad de los sectores populares fue forjada al calor de la relación con el Estado y de la interpelación que de este emergía hacia el “pueblo trabajador”. Al margen de las incontables interpretaciones en torno del peronismo, hay dos elementos a rescatar para el desarrollo de este trabajo: en primer lugar, no podemos leerlo como una mera concesión desde arriba a fin de canalizar el peligro que suponían las masas activadas sino, tal como expresamos antes, como un proceso conflictivo y dialéctico entre la irrupción de los sectores subalternos en la escena pública y sectores dominantes que pugnaban por canalizarla productivamente -en términos capitalistas-. En segundo lugar, la articulación de la identidad popular en relación con el peronismo y el Estado es una clave todavía imprescindible para la lectura de los procesos actuales. Por ello, todavía pesan como factor de interpelación a la hora de construir proyectos políticos en la Argentina.

El peronismo es un momento que sintetiza la productividad material y simbólica de los Estados periféricos. Siguiendo los aportes de Daniel James (2006), éste sustenta su fuerza simbólica en el *reconocimiento* de los trabajadores como clase. La expansión de la vida popular al espacio público y el discurso plebeyo y -diríamos hoy- “políticamente incorrecto” supusieron un quiebre con el pasado (fundamentalmente con la “década infame”, caracterizada por la exclusión y la represión de los sectores populares) y una auténtica irrupción de un sector social antes invisible en el pacato orden constituido. En términos materiales, no debe soslayarse que esto se sustentó en una importante ampliación de los derechos sociales y laborales, constituyendo una noción de ciudadanía que excedía los rasgos procedimentales considerados hasta el momento (incluso por voces que expresaban luchas sociales, como el irigoyenismo, más acotado a la disputa por derechos políticos). El peronismo, sobre todo una vez instalado en el poder estatal, se movió en la tensión entre la radicalización de los trabajadores y la institucionalización de sus canales de participación. La dimensión eminentemente cooptativa estuvo ligada a los sindicatos, que constituyeron una fuerza política de gran peso político en las décadas sucesivas. En cualquier caso, dicha tensión es la forma específica que tomó en nuestro país la relación entre el conflicto social y el Estado.

Argentina: Estado y conflicto social en los últimos años

Diciembre de 2001: hegemonía en peligro

Las transformaciones en el capitalismo internacional y nacional han modificado la fisonomía del Estado y el modo en que éste se vincula con las contradicciones de la sociedad civil. La profunda crisis que sacudió el país a comienzos del milenio ha evidenciado cambios relevantes en los actores sociales que expresan dichas contradicciones y, en tal sentido, ha implicado importantes modificaciones en el aparato estatal y su capacidad de articular la formación social en su conjunto.

Las jornadas de diciembre de 2001 han sido caracterizadas de la más diversa manera, con importantes diferencias en cuanto a la espontaneidad o preparación de las mismas. En cualquier caso, podríamos caracterizarlas como *insurrección de masas* que irrumpe en el escenario histórico asestando un fuerte golpe a las políticas gubernamentales de orden neoliberal. Puede arriesgarse que con ella se cerraría el ciclo de derrota y reflujo del movimiento popular iniciado el 24 de marzo de 1976 con el terrorismo de Estado, y continuado (más allá de los matices) durante los sucesivos gobiernos civiles de Alfonsín, Menem y De la Rúa a lo largo del cual los sectores subalternos no logran trascender su accionar defensivo.

Los meses que siguieron a diciembre se caracterizaron por una alta participación social directa, diferenciada tanto de los actores tradicionales como del Estado. La brecha fundante de las sociedades modernas entre Estado y sociedad se veía debilitada en favor de la segunda. A pocos días de asumir (enero de 2002), el propio presidente Duhalde afirmaba, por ejemplo: “con las asambleas en la calle no se puede gobernar”. Si bien estos picos de participación tendieron a reducir su protagonismo, la *normalización* de la situación no fue sencilla y contuvo momentos de gran tensión social, como la masacre de Puente Pueyrredón en junio de 2002, que aceleró los tiempos electorales frente a una sociedad que no parecía tolerar la recomposición represiva de los mecanismos estatales.

El problema pendiente del Estado era, entonces, la recuperación de su rol monopólico de la gestión social y en esa dirección puede leerse el surgimiento de la figura de Néstor Kirchner, presentado como ajeno a las políticas neoliberales de la década previa e intentando hacer propios los reclamos que la sociedad en movimiento había puesto sobre el tapete.

2003: ¿el Estado vuelve a su lugar?

La crisis de representación que estalló en el 2001 ha debilitado profundamente la capacidad de los actores políticos tradicionales (partidos y sindicatos) de canalizar las demandas de los sectores subalternos. El amplio espectro de agrupaciones piqueteras (tengan o no relación con dichas organizaciones) ha intentado, de alguna manera, llenar ese vacío, mediante la organización de trabajadores desocupados. Sin embargo, no ha logrado formar un espacio político que les permita imponer temas propios en la agenda pública y, menos aún, lograron presentarse ellos mismos como una alternativa de poder.

En este contexto aparece el gobierno del Presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003, con un 22% de caudal de votos y una fuerte dependencia de la estructura política del presidente anterior, Eduardo Duhalde. Al mismo tiempo, tanto el primer mandatario como la mayoría de funcionarios y grupos afines y cercanos al gobierno actual provienen de sectores tradicionales de la política partidaria argentina, en muchos casos ligados al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y, con ello, al proceso de privatizaciones e implementación de políticas de corte neoliberal en el país. De manera que el gobierno actual no sería un emergente propio de los procesos de autoorganización y resistencia surgidos en la década de 1990 y fortalecidos (y visibilizados) a partir de diciembre de 2001, sino más bien un actor externo a ellos que ha tomado como propias algunas de sus demandas, ya que incluso su partido de proveniencia fue, en aquellas jornadas, uno de los blancos predilectos del rechazo popular.

Ya en sus primeros meses, el gobierno comenzó a sustentar la fuerte legitimidad de la que goza todavía hoy en recuperar algunas de las consignas y demandas que las jornadas de diciembre de 2001 habían instalado. Así, ha habido importantes cambios en la Corte Suprema, una política progresiva en el ámbito de los Derechos Humanos y un

cambio de rumbo, al margen de cómo se lea, en lo que atañe a la relación con los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial).

Sin embargo, lo novedoso del proyecto político que asume el gobierno en 2003 aparece ligado a su permeabilidad respecto de los reclamos del movimiento popular. Para cualquier expresión organizada de la izquierda, en el sentido más amplio de la palabra, resulta sencilla la postura a tomar frente a políticas como las que predominaron en la década de 1990. Allí los debates y diferencias discurrían, acaso, por los métodos de resistencia a las mismas. Algunas corrientes se recluyeron en el trabajo barrial, otras intentaron resistir en las calles como fuera necesario, etc. Pero la presente coyuntura resulta hartamente más comprometedor, ya que la recuperación “oficial” de algunos reclamos históricos de estos actores obliga a agudizar el análisis para no caer en posiciones rígidas que limiten la capacidad de interpelar políticamente, es decir, para no caer en el aislamiento discursivo (generalmente bajo la forma de una iracunda diatriba que denuncia una lisa continuidad -e incluso identidad- entre presente y pasado) respecto del acontecer social.

En esta investigación abordamos particularmente la novedosa relación que se establece entre el gobierno y los movimientos sociales, donde sostenemos que el importante apoyo que aquél mantiene está dado por la efectiva recuperación (parcial o, mejor dicho, institucional) de la energía social liberada en diciembre de 2001, tanto en forma como en contenido. En contenido, en tanto buena parte de los reclamos directos de quienes protagonizaron las ya célebres “históricas jornadas” son de algún modo parte fundamental de la agenda estatal, aun cuando nuestro análisis también pretende dar cuenta de qué ocurre con aquellos reclamos una vez que pasan por el Estado (¿Cómo se transforman? ¿Qué sucede con su radicalidad inicial?). En cuanto a la forma, las apariencias confrontativas también pueden deber su génesis a un momento social de profunda conmoción y belicosidad que el Estado debe tratar de algún modo, aunque más no sea para recuperar su lugar de privilegio en la dirección de la sociedad argentina, que se vio amenazado por los picos de participación social de aquellos meses que siguieron a diciembre de 2001. La fortaleza del presente gobierno no radica solamente en la opinión pública, la imagen positiva y demás elementos cuantitativos, sino también en el apoyo político de una cantidad importante de sectores activos del campo popular, muchos de ellos provenientes del arco piquetero (los llamados “piqueteros oficialistas”). Este apoyo es una preocupación permanente del gobierno, que realiza políticas activas para reafirmarlo y perpetuarlo. Las mismas tienen por efecto tanto el alineamiento de determinados sectores como la división de otros a partir de los desacuerdos respecto del carácter del actual proceso. Nuestro propósito es el análisis de dichos efectos poniendo particular atención en el problema de la autonomía que los movimientos mantienen respecto del Estado, considerando que ella es la que puede permitir distinguir entre procesos de transformación real y de recomposición hegemónica, ya que de ella depende, como intentaremos demostrar, la capacidad de las organizaciones de los sectores populares de imponer sus propios proyectos y de no ser absorbidos por elementos tradicionales.

De este modo, la afinidad entre determinadas políticas gubernamentales y algunos sectores del movimiento popular en general ha significado modificaciones en el mapa de las organizaciones de los sectores populares, implicando quiebres, divisiones, fusiones, etc., en buena medida a causa del posicionamiento respecto del gobierno actual.

Una cuestión central en este punto es cómo leer la apropiación gubernamental de importantes reclamos históricos del campo popular. En este punto consideramos acuciante no abandonar la dialéctica frente a tentaciones maniqueas. Las medidas oficiales identificadas con luchas que marcaron las últimas décadas no son una mera

concesión que busca apaciguar la protesta, sino que constituyen también una conquista producto de la acumulación de fuerzas en esta disputa. Como expresamos en el marco teórico, sólo una concepción dialéctica de Estado, que conciba sus aparatos (lo que incluye leyes y medidas, desde luego) como cristalización de correlación de fuerzas en el orden social permite pensar la complejidad de la relación entre las luchas sociales y su dimensión estatal.

De manera que lo que aparece luego del 2003 es una puja en torno a la movilización social y, fundamentalmente, a su direccionamiento. Varios autores coinciden en caracterizar las políticas del gobierno de Kirchner como desmovilizadoras y desarticuladoras, particularmente hacia el arco de movimientos piqueteros: Svampa y Pereyra (2004) hablan de “relaciones peligrosas”, teniendo en cuenta la sutileza del gobierno de Kirchner para combinar las diversas estrategias posibles destinadas a “integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero” (pág. 212). Por otro lado, Schuster (2004) lee las políticas del gobierno actual como una “estrategia desmovilizadora”, a partir de acciones de gobierno que retoman parcialmente reclamos de diferentes movimientos y organizaciones que obligan al arco piquetero a tomar una posición al respecto, y que tienen por efecto el aislamiento de los sectores más combativos y la negociación con los más dialoguistas. Rajland y Campione (2006), por su parte, analizan las políticas gubernamentales en términos de desmovilización, agregando el rol de la ayuda social y la incorporación de sectores del movimiento piquetero a una coalición en torno a la figura presidencial como importantes factores que fragmentan el mapa de estas organizaciones. Asimismo, Borón (2005) diagnostica una fragmentación del movimiento piquetero a partir de políticas asistencialistas y de cooptación sobre referentes de importantes sectores del mismo.

Estas posiciones parecen tener de común un marcado hincapié en la dimensión *cooptativa* de las políticas oficiales más que en la producción de consenso social, quizá haciendo una lectura unilateral -desde la posición del gobierno- y, por ende, que no ahonda en la experiencia concreta que los distintos sectores sociales atraviesan. Consideramos que no se trata solamente de políticas de desmovilización sino también de una *movilización selectiva*. Como habíamos adelantado, el apoyo de sectores del movimiento popular es fuertemente impulsado desde el gobierno, buscando un efecto de identificación, más que la mera incorporación y/o acallamiento. Volveremos luego sobre las dimensiones que articulan a determinadas organizaciones sociales con el proyecto político del gobierno.

Llegados a este punto, podemos plantear y fundamentar las hipótesis centrales de este trabajo, a saber:

- La profundidad de los cambios emprendidos por un gobierno “progresista” está en estrecha relación con el nivel de movilización de las organizaciones de los sectores populares que apoye y refuerce dichas transformaciones.
- La posibilidad de sostener niveles de participación popular está condicionada por la autonomía política de las diferentes expresiones del campo popular respecto de los gobiernos “progresistas”.

Estos interrogantes deben ser leídos de manera dinámica como un campo de disputa. Las particularidades de las formaciones sociales periféricas que explicamos atrás dan cuenta de la centralidad que toma el Estado en los procesos políticos. En el modo en que se configure la relación entre las instancias gubernamentales y las fuerzas sociales radica la posibilidad de transformación social.

Excursus: nuevos interrogantes para el viejo problema de la autonomía

Quizá el problema de la emancipación tenga, bajo sus diversas formas, varios siglos de historia. Pero los interrogantes concretos acerca de los modos y sujetos que pueden encarnar dicho proyecto en el capitalismo son relativamente novedosos en la historia. Remiten, primordialmente, a los trabajos de Marx de la segunda mitad de la década de 1840 y la primera mitad de la siguiente. Los primeros son años de producción de una fundamentación histórico-filosófica de la adhesión a la causa del proletariado. Según Michael Löwy (1972), si hay que pensar un quiebre central -quizá en una tácita alusión crítica a Althusser y su célebre “ruptura epistemológica”- en la obra de Marx es a partir de la noción de revolución como “autoemancipación del proletariado”. Esta aparece hacia el final de 1844 como una ruptura con concepciones idealistas que Marx arrastraba de su “espíritu alemán”, que enfatizaban en la fuerza activa de las ideas y desdeñaban la potencialidad transformadora de las masas, en sus diversas expresiones⁸. Pues bien, esta idea puede pensarse como la primera expresión acerca de la necesidad de los sectores subalternos de constituirse a sí mismos de manera autónoma respecto de las clases dominantes. Problema que será profundizado luego de la experiencia de 1848, donde esto se plasma de manera trágica en la masacre de junio. Para Marx, 1848 es ante todo una enseñanza: la clase obrera debe tener autonomía organizativa y político-ideológica respecto de la burguesía, pues si no es ella misma quien lidera el proceso termina por ser una masa de maniobra de intereses que le son ajenos y antagónicos.

Este problema ha sido desarrollado, dentro de diversas tradiciones emancipatorias, en diferentes dimensiones pero siempre sobre esta base, ya que de lo que se trata es de no subordinar intereses de los sectores subalternos a una política externa a ellos. Así, visiones radicales afines al anarquismo plantean la autonomía como la reconstitución de la sociedad a partir del autogobierno y la autodeterminación permanentes en oposición a la heteronomía que supone la ley dictada desde fuera (por caso, por el Estado). Estas lecturas se emparentan también con el rechazo de las formas organizativas propias más ligadas a la clase obrera del siglo XX (partido y sindicato) por portar ellas elementos reificantes de la lógica que se quiere desarticular (estas posiciones abarcan un amplio arco de autores entre quienes sobresalen Castoriadis, Holloway, Bonefeld, etc.). Por su parte, tradiciones más afines al leninismo clásico plantean este problema en términos de “independencia de clase” y muy centrada en la cuestión de la organización o, lo que es lo mismo en este caso, el partido revolucionario.

Pues bien, ¿cómo pensar la autonomía en relación con el Estado y el gobierno? En este caso se trata de un problema acuciante con arreglo a los procesos que se suceden actualmente en América Latina. Coincidimos con Elías (2006) en que “para dar viabilidad a un proyecto alternativo es necesaria la movilización, participación y autonomía de movimientos sociales, viejos o nuevos, respecto a los gobiernos definidos como progresistas”. Proponemos entonces considerar este criterio como la demarcación entre la construcción de un proyecto alternativo, crítico e incluso anticapitalista y, por otro lado, un cambio, aunque progresivo, en el carácter y el contenido de los sectores dominantes que no trastoca los pilares más profundos de una sociedad. La cooptación del conflicto y los múltiples mecanismos clientelares pueden inscribirse en este modelo de, en términos de Gramsci, revolución pasiva (Gramsci, 2003:83-90). El autor meridional piensa esta idea en relación con los movimientos de masas que, en el desarrollo del proceso del *Risorgimento*, fueron finalmente dirigidos por los partidos tradicionales, frente a la debilidad de las fuerzas radicales populares de tener clara conciencia de los objetivos propios y su antagonismo respecto de los de los partidos “del orden”. De esta manera, la fragmentación de las organizaciones populares y su dificultad para articular un proyecto amplio que pueda contener la multiplicidad de aspiraciones de todas ellas, es un factor que facilita la aparición de sectores externos que capitalicen la fuerza

movilizadora de éstas. La disputa se da, de este modo, por la hegemonía del proceso político, cuyo logro por parte de los sectores subalternos sólo puede ser producto de la autonomía respecto de los sectores dominantes y del Estado en tanto instancia de concentración del poder de éstos.

¿Por qué es necesario que los movimientos guarden autonomía respecto de los gobiernos? Esta pregunta parece más que pertinente en una coyuntura latinoamericana donde algunos de éstos demuestran pretensiones realmente transformadoras (como puede ser el caso de Venezuela y Bolivia, a diferencia quizá de Argentina y Brasil). Consideramos esta necesidad teniendo en cuenta la noción de *garantía* de los procesos transformadores, ya que la vitalidad de la construcción política de los movimientos sociales es el resguardo frente al carácter problemático de la transformación social por la vía estatal, particularmente en Estados periféricos. Allí, por la mencionada centralidad y complejidad que estos asumen en tanto articuladores de la formación social capitalista⁵, la ocupación de cargos de gobierno no es garantía del manejo de resortes centrales de la actividad social. Este problema actualiza la clásica distinción marxista entre poder de Estado y aparato de Estado (Althusser, 1997). Una variedad de casos latinoamericanos confirman que la llegada de sectores populares a determinados aparatos de Estado, por más relevantes y centrales que parezcan, no garantiza la posesión efectiva del *poder del Estado* (quizá la experiencia histórica más demostrativa de este problema sea el caso del gobierno de Salvador Allende en Chile, entre 1970 y 1973), que fluctuó hacia sectores como las fuerzas armadas en connivencia con corporaciones empresariales y sindicales.

Asimismo, la capacidad estatal de internalizar el conflicto es siempre un condicionante de la acción de los movimientos, que se ven constantemente compelidos (pocas veces es una opción) a establecer lazos que hieren su capacidad de acción. Tales pueden ir desde la ayuda social supeditada a determinadas tareas, las formas impuestas de organización a la hora de acceder a subsidios (al margen de que no se las respete, las cooperativas, asociaciones civiles y demás introducen formas jerárquicas de división del trabajo) hasta la represión velada o explícita, que también es una forma del Estado de lidiar con el conflicto. Todas estas dificultades constituyen permanentes desafíos a los movimientos, y poseen una importante fuerza desarticuladora, sustentada en la asimetría de recursos materiales y, en muchos casos, simbólicos. La capacidad de sostener niveles de autonomía por parte de los movimientos es lo que asegura el establecimiento de tiempos y lenguajes políticos propios, sin que esto implique desconocer la existencia del Estado o negar la relación con él, sino la decisión política de no subordinar el proyecto propio a la lógica estatal.

De manera que la autonomía de los movimientos es lo que garantiza que sigan siendo tales y que no *devengan* Estado, ya que ello implicaría el congelamiento de sus potencialidades en marcos institucionales, a través de la asunción de otras reglas de juego y, previsiblemente, la desarticulación de sus proyectos y formas de construcción primigenias. Sin embargo, la autonomía no debe significar aislamiento, ni rechazo *per se* a la relación con el Estado (dicho sea de paso, imposible) sino la posibilidad de sostener una tensión: no se puede ser puro movimiento, en la medida en que el Estado existe y su presencia atraviesa cualquier espacio político, a la vez que una integración definitiva es al mismo tiempo la desaparición del movimiento en cuanto tal. La tensión es, entonces, una capacidad estratégica inscrita entre las ventajas de la coyuntura y los condicionamientos que la misma impone. Todo esto es de suma complejidad, pues se juegan allí identificaciones simbólicas y favores materiales que ejercen un fuerte poder sobre movimientos que no siempre tienen la capacidad para resistirlas.

El Estado y los movimientos sociales en la Argentina

La noción de movimientos sociales ha sido ampliamente discutida en la literatura de las ciencias sociales, centralmente en lo relativo a su distinción respecto de los modos clásicos de organización más ligados a caracteres clasistas (sindicatos y partidos). El surgimiento, hacia mitad del siglo XX, de instancias diferenciadas de organización con horizontes políticos menos determinados (aunque no por eso menos radicales o transformadores) y con una conformación social no inmediatamente subsumible al ámbito productivo ha obligado a la teoría a reflexionar sobre esta problemática. Sin ánimo de hacer una revisión exhaustiva de este problema, daremos cuenta de algunas nociones básicas de las cuales partimos para caracterizar a los movimientos piqueteros como *nuevos movimientos sociales* y, a partir de allí, comprender la especificidad de su relación con el Estado, tomando particularmente en cuenta el caso de Barrios de Pie.

Alain Touraine (1987) concibe a los movimientos sociales como el accionar colectivo de un sector social que lucha contra un oponente –otro sector social- por el control de determinados recursos socioculturales y materiales de una sociedad. A diferencia de Castells (2000), para quien los movimientos sociales son derivados de los enfrentamientos de clase o fracciones de clase y presentan una autonomía solo relativa respecto de aquellas, el planteo de Touraine permite pensar indistintamente en clase, raza, género, etc. En esta misma línea, Offe (1988) destaca el carácter no clasista de los movimientos sociales y Fernández (1991) establece que éstos son manifestación de un conflicto y petición de un cambio, por lo que están asociados a conductas de innovación social y cultural, aunque no luchan directamente por el poder político y conserven una autonomía respecto de las clases o sectores que los integran y/o influncian.

Los trabajos de Alberto Melucci (1994) son particularmente interesantes para abordar nuestra problemática, ya que permiten asociar la aparición de los movimientos sociales en la escena pública (la explotación de las oportunidades políticas) con la construcción de una identidad colectiva a partir de un sentido dado al interior del movimiento, donde la acción colectiva desplegada es sólo una práctica entre otras. En el caso de los movimientos piqueteros esto está presente bajo la forma de una centralidad del trabajo territorial que es desplegada en el espacio público como una lucha por la conquista de recursos que puedan ser utilizados de manera autónoma.

En este sentido, De Sousa Santos (2001) relaciona el surgimiento de los *nuevos movimientos sociales* con una crisis de las instancias tradicionales de representación y organización (partidos políticos y sindicatos), en paralelo a una reestructuración productiva que produce nuevas formas de dominación más allá del plano laboral. En tal sentido, sus prácticas no se reducen a reclamos de derechos sino que se extienden sobre la producción de una ciudadanía de nuevo tipo, en torno a propuestas integrales de socialización.

En el caso argentino, los movimientos piqueteros conjugan la novedad –la existencia que excede el reclamo económico y se afirma en la producción de una subjetividad sustentada en un hacer autogestivo de orden cotidiano (Colectivo Situaciones, 2002; Ferrara, 2003)- con la especificidad de las transformaciones estructurales que sufrió la Argentina en las últimas décadas –el tránsito “de la fábrica al barrio” en tanto espacio de construcción de identidad de los sectores populares (Delfini y Picchetti, 2004)-. Además, en los últimos años han sido los actores centrales en la mayor parte de los procesos de protesta social que se han dado en el país.

A la hora de caracterizar los movimientos piqueteros, varios autores coinciden en que pueden ser distinguidos en tres ramas, de acuerdo a su matriz ideológica y tradición fundante: Schuster (2004) los denomina como vertiente sindical, partidaria y autonomista. Svampa y Pereyra (2004), por su parte, los ordenan como *populistas*, de

origen peronista o nacionalista de izquierda y relacionados con el modelo organizativo sindical, *izquierda tradicional* (ligados a partidos de izquierda, incluso conformados, en muchos casos, como “brazos piqueteros” de los mismos) y la llamada *nueva izquierda*, con cierta relación con la tradición autónoma que podría remontarse a diversos trabajos de base que incluyen comunidades eclesiócristas tercermundistas en las décadas del sesenta y setenta, así como tomas de tierras y diferentes instancias de articulación local comunitaria. Esta tradición se ha visto actualizada por los debates dentro del marxismo en torno al poder y el Estado, que han privilegiado la construcción de territorios autónomos por sobre la confrontación directa con el poder estatal. Estas tipologías quizá requieran una actualización a la hora de pensar una *sociología* de los movimientos piqueteros, pues la fisonomía de cada una de las corrientes se ha ido modificando y, además, pueden encontrarse múltiples expresiones organizativas que no responderían de manera clara a ninguna de las corrientes planteadas.

Sin embargo, el sentido de las próximas páginas no está planteado en el sentido de trabajar sobre las tipologías ya existentes de los movimientos piqueteros, sino en construir un mapa de acuerdo a sus posiciones respecto de la orientación política del gobierno de Kirchner. Para ello, el modo más apropiado de distinguirlos es similar a las planteadas por Schuster y Svampa y Pereyra, aunque no idéntica.

A continuación caracterizaremos brevemente las tres corrientes de acuerdo a su relación con el Estado a partir de las políticas oficiales, si bien profundizaremos en la “populista”, ya que consideramos que allí se condensan dimensiones centrales de la lógica estatal como un permanente intento por absorber y “normalizar” el conflicto social contra sectores subalternos que pretenden exceder ese límite en la construcción de un proyecto alternativo.

Izquierda tradicional: el pasado en copa nueva

La izquierda tradicional argentina, sobre todo la de origen trotskista, concibe la lucha revolucionaria desde un punto de vista ortodoxo, donde el partido de vanguardia es el elemento avanzado de la clase obrera que la prepara para la conquista del poder político y su elevación como clase dominante. En tal esquema, los movimientos piqueteros surgidos hacia el final de la década pasada no podían sino ser una anomalía. Y, como tal, la reacción fue tardía. Sólo cuando su centralidad como sujeto antagónico quedó confirmada, comenzaron a surgir los movimientos piqueteros ligados a los partidos. A tal punto estos grupos son creaciones directas de los partidos frente a una coyuntura que excedía sus formas clásicas de comprender la política, que su escasa creatividad impidió, en algunos casos -PO, MST-, fundar un espacio con siglas diferentes a las del partido. Pero no es sólo una cuestión nominal. Políticamente, los espacios piqueteros no son considerados en sí mismos sino en relación con la adopción de los dogmas del partido. Es decir, el rol central y la vitalidad de las masas en los procesos de transformación social está estrictamente supeditada al control organizativo e ideológico del partido (de ahí que abundan las mezquindades de cada partido respecto de las luchas “encabezadas” por los otros, casi nunca reconocidas).

Esta izquierda incluye también al MIJD identificado con la mediática figura de Raúl Castells y, parcialmente, al MTL, ligado al Partido Comunista, que como bien lo expresa Mazzeo (2004), aparece atrapado entre algunas nociones novedosas como las de poder popular y su vinculación con una de las organizaciones más expresivas de la izquierda tradicional argentina.

Todos estos grupos se han posicionado frente al gobierno como el ala “dura” de la oposición, remarcando una y otra vez los ejes de continuidad entre el actual mandatario y los anteriores. Parados en esta lectura, tienden a ser aislados del humor social general y

hasta alentados por el gobierno en algunas de sus acciones “extremas”, por la comodidad que para él implica tenerlos de interlocutores. Así, más de una vez, se ha visto coincidir a figuras como Jorge Altamira y Raúl Castells con Mariano Grondona y Jorge Ávila en sus críticas al gobierno.

De esta manera, la opción del gobierno para con ellos es su marginación, que combina la caricaturización, el desdén por sus acciones y dosis refinadas de represión. Esta última no toma la forma de violencia abierta como lo hacía en la década pasada, sino que tiende a instalarse a través de la criminalización de la protesta (procesamientos de militantes por diferentes causas). Vale la aclaración de que no son éstos grupos los únicos destinatarios de las políticas represivas, que también tuvieron y tienen un peso importante sobre los sectores de tendencia autónoma.

Una lectura similar del gobierno aparece en otras organizaciones que podrían constituir, en términos de origen, forma organizativa y tradición, otra corriente. Se trata de los grupos de raigambre guevarista, tales como el Movimiento Teresa Rodríguez -hoy fragmentado- y otros espacios centrados en el trabajo territorial, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En términos de formas de construcción se distinguen de las organizaciones de tipo partidarias, brindando una mayor relevancia al desarrollo político de las bases. Sin embargo, no ahondamos tanto en ellas pues su caracterización del gobierno de Kirchner -objeto específico de esta tipología- se inscribe en la línea de la izquierda tradicional.

Organizaciones de nuevo tipo: peligros y asimetrías

Las diferentes organizaciones ligadas a la denominada “nueva izquierda” constituyen quizá el caso más delicado. Han sido las que más han sufrido de divisiones y rupturas a partir de la llegada del kirchnerismo. Quizá por no contar con la organicidad de los partidos ni la fuerza política de los movimientos de corte sindical, su situación es más frágil por cuanto cuentan con menos recursos simbólicos y materiales para resistir la fuerza desarticuladora del presente gobierno. Tanto la fuerza como la debilidad de estos movimientos radican en que se constituyeron como una forma de rearticular lazos sociales en contextos de profunda devastación. Como debilidad, marca las necesidades materiales como un eje difícil de trascender, lo que los torna vulnerables a la potencia disgregadora de la ayuda estatal, que trae siempre con ella distintas formas de condicionamiento. De allí que la necesidad de autogestionarla de manera comunitaria sea una de las banderas más características de estos espacios. Como fortaleza, las relaciones que se constituyen en los ámbitos propios de estos movimientos tienden a ser prefigurativas de aquella sociedad que se pretende construir, de manera que medios y fines no aparecen brutalmente escindidos como en la izquierda tradicional. Esto último permite una mayor reflexividad sobre la necesaria autonomía que debe mantenerse respecto del Estado.

Desde fines de los años 90 hasta nuestros días se han formado múltiples movimientos de trabajadores desocupados (MTD) en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Muchos de ellos estuvieron agrupados en los MTD Aníbal Verón. Sin embargo, ya para finales del año 2003, comienzan las divisiones a raíz de las distintas posiciones respecto del gobierno. Asimismo, un pequeño grupo de MTDs (Guernica, Solano y Allen) se alejan asumiendo posiciones de mayor identificación con la tradición autonomista propiamente dicha, que circula por las discusiones de la izquierda contemporánea.

Un boletín del MTD Aníbal Verón de principios de 2004 dice sobre la llegada del gobierno de Kirchner: “sabíamos que era un gobierno inteligente que no nos pegaría con

represión pero sí con su política”. Hasta el final de 2003, se confluó en algunos reclamos con Barrios de Pie y otros grupos que luego se acercarían cada vez más a las posiciones del gobierno. Las divisiones y desencuentros al interior del campo popular crecerían hasta producir fisuras que hoy parecen definitivas.

Cerca del gobierno: desafíos a la autonomía

Con mayor o menor reserva, las organizaciones de tipo sindical o “populista” se acercaron al gobierno. Exceptuando a la CCC (Corriente Clasista y Combativa), de todos modos en el límite entre lo sindical y la izquierda tradicional por su ligazón al PCR (Partido Comunista Revolucionario, de tendencia maoísta), que ha fluctuado y hoy poco coincide con las organizaciones oficialistas, el entero arco de movimientos de esta vertiente ha ido asumiendo posiciones cada vez más comprometidas con las políticas oficiales, proveyendo en muchos casos de funcionarios a oficinas relevantes del Estado, mayormente en áreas vinculadas a políticas sociales.

Dado que este trabajo tiene como uno de sus propósitos discutir en torno a la noción de autonomía, debemos hacer un recorte respecto de las organizaciones cercanas al gobierno, ya que algunas directamente no presentan dicha idea como una cuestión a problematizar. Tal es el caso del Movimiento Evita, que merecería un estudio aparte, por constituir más una auténtica creación de algunos sectores del gobierno que un movimiento preexistente que toma la decisión política de alinearse. Sus objetivos políticos están vinculados con la ocupación de espacios de poder en cualquiera de sus instancias, con reminiscencias simbólicas más ligadas a las pugnas intestinas del peronismo que al proyecto socialista de nación de los sectores más radicalizados del movimiento.

Quizá la FTV (Federación de Tierra y Vivienda) y Barrios de Pie sean los sectores más propiamente identificables como movimientos piqueteros con un pasado relevante en la resistencia a las políticas neoliberales y un presente de enorme identificación con el gobierno y un grado importante de integración al mismo. Pero también aquí cabe una diferencia no menor. La FTV, como la CTA que conforma, es un paraguas de una multiplicidad de organizaciones no necesariamente coincidentes ni en el programa ni en la práctica. Coexisten, de hecho, organizaciones anticapitalistas con otras de visiones más cortoplacistas y contemporizadoras con el integracionismo. La FTV fue precursora de los piquetes en la zona de La Matanza, del mismo modo que luego lo sería de los llamados “piqueteros oficialistas”. Su incorporación a las posiciones del gobierno fue casi sin condiciones ni miramientos y con un alineamiento discursivo muy fuerte, siempre visible en las explosivas declaraciones de su principal referente, Luis D’Elía.

La experiencia del Movimiento Barrios de Pie

Identidad e Historia

El MBP nació en diciembre de 2001 a partir de una confluencia de factores. Por un lado, la Corriente Patria Libre (en adelante CPL) considera prioritario sistematizar y profundizar sus diversos trabajos territoriales, considerando que la organización de desocupados sería, en los años sucesivos, un elemento fuerte para lograr una presencia política relevante al interior del campo popular. Al mismo tiempo, se articulan un conjunto de movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupados -con diferentes tipos de vinculación a CPL- que venían desarrollando diferentes trabajos en muchos barrios de diferentes provincias de la República Argentina. Durante el 2002, el MBP se

asentó en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y en 12 provincias de la Argentina.

En los distintos barrios en los que se encuentra, el MBP organiza comedores populares, merenderos, huertas y panaderías comunitarias, emprendimientos laborales, apoyo escolar y alfabetización, talleres de educación popular, bibliotecas populares, campañas de salud y formación de agentes de salud, talleres sobre violencia familiar, actividades vinculadas con la cultura y la comunicación, etc. Entre sus proclamas programáticas se reivindican significantes históricos de la tradición nacional-popular: “una Argentina con justicia social, en la que se permita y se promueva la participación democrática de todo el pueblo, para que podamos decidir sobre nuestro destino, libres de la dominación de intereses ajenos a las necesidades de las mayorías”⁹.

Los orígenes de la organización pueden rastrearse varios años antes de su conformación como tal. Parte de su estructura de trabajo barrial y su línea política general se montan sobre las múltiples iniciativas abiertas por la CPL, referente político del Movimiento¹⁰. La historia de esta puede darnos una idea sobre las prácticas y discursos que hoy ubican al movimiento tan cercano al gobierno de Néstor Kirchner.

CPL surge a partir del nucleamiento de viejos militantes del ERP de la provincia de Córdoba. Si bien allí tal organización acarrea una tradición muy cercana al nacionalismo revolucionario (incluso al peronismo), de ningún modo puede hablarse de que el origen de CPL sea peronista. Durante los años noventa, su principal bandera fue la reivindicación del Che Guevara y, en menor medida, de Mario Roberto Santucho, es decir, una recuperación de la tradición de la lucha armada revolucionaria de las décadas del sesenta y setenta. Durante toda la década de 1990, el trabajo barrial de la organización se acercó crecientemente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en aquel momento ferviente opositora de las políticas de Carlos Menem. Esto se profundizó de tal manera que hacia el año 99, la juventud de Patria Libre comenzó a trabajar en los barrios como “Juventud de la CTA”. Para esa misma época, las tendencias de la organización hacia acordar con sectores del peronismo de izquierda eran cada vez mayores. El acercamiento de los principales referentes de la organización, Humberto Tumini y Jorge Ceballos a núcleos de este espectro político consumó el proceso (en 1997 y 1999, CPL se presenta a elecciones en el Frente de la Resistencia junto con Jorge Reyna y un grupo de viejos militantes de la organización Montoneros).

En 2001, como decíamos, se constituye orgánicamente Barrios de Pie, con una mayor independencia respecto de la CTA y, fundamentalmente, de la FTV (Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat) de Luis D’Elía, organización más directamente vinculada a la anterior. En la medida en que la oposición al gobierno era indudable (tales los casos de De La Rúa, y en menor medida, de Duhalde), el MBP compartió múltiples acciones directas e instancias de coordinación con una multiplicidad de agrupaciones piqueteros de izquierda, incluso las vinculadas a los Partidos de filiación trotskista.

Quizá el horizonte del Movimiento, ya desde sus antecedentes y durante toda su trayectoria como tal sea la idea fuerza de la “liberación nacional”, entendida fundamentalmente en oposición a un enemigo externo, encarnado en esta época en las instituciones financieras internacionales y las potencias extranjeras. La idea de un desarrollo nacional autónomo parece ser el objetivo político, que décadas atrás se encarnaba en el proyecto del socialismo nacional, idea no tan presente en las banderas de nuestros días.

A partir de documentos ligados con los momentos fundacionales de CPL, surge más claramente la inscripción de la misma en la corriente del nacionalismo “popular” o “revolucionario”, aunque con un espíritu claramente socialista en sus objetivos últimos. CPL apuesta a la construcción de un “Movimiento Nacional”, también llamado “Frente

de Liberación Nacional y Social” (coloquialmente denominado como “Frente Popular”). Esta idea se articula sobre la concepción de que la contradicción, más cara al marxismo, *capital-trabajo*, se encuentra en los países periféricos como la Argentina, sobredeterminada por la contradicción entre Imperialismo y Nación (“liberación o dependencia”, en términos de la militancia), que toma la forma de primera contradicción a ser resuelta. De ello se deduce que para el logro del socialismo es necesario plantearse una “estrategia de transición” con un componente de amplitud que puede involucrar sectores de la burguesía nacional. Se admite incluso que tal frente puede, en un principio, no estar hegemonizado por los sectores populares, que darán la disputa en su seno.

En las entrevistas con referentes del MBP en la actualidad, estos planteos programáticos reaparecen, y de algún modo dan lugar a sustentar las políticas actuales de la organización respecto del gobierno de Néstor Kirchner. La apuesta política del movimiento no es vista como una matización de sus primigenios principios programáticos, sino más bien como su *realización*. Esta idea tiene su basamento en una distinción entre “método de análisis” (marxismo) e “identidad” (nacionalismo popular). En este sentido, las prácticas de acercamiento al gobierno se justifican por un “anclaje” del método en la realidad, vale decir, por las *mediaciones* entre teoría y práctica. A la hora de intentar establecer un balance del acercamiento del MBP al gobierno analizaremos qué sucede con este esquema.

De esta manera, es allí en el núcleo de la soberanía nacional, en torno a significantes muy afines a reivindicaciones históricas del peronismo que el gobierno de Kirchner pretende actualizar, que se puede rastrear el hilo de compatibilidad entre este y el MBP que permite dar inicio a mecanismos de incorporación. Es en su perfil ideológico y político (no simplemente en la “ideología” en sentido llano, como mero conjunto de creencias, sino fundamentalmente en la tradición en la que se inscribe el movimiento –la idea de liberación nacional-) donde puede rastrearse la relación de afinidad entre un gobierno y un movimiento social. En este sentido, debe evitarse el comprender la relación de afinidad como un acto de “traición” o de transformismo, en la medida en que no se trata sencillamente de un cambio en los horizontes políticos de un movimiento, sino de la convicción de que buena parte de dichos horizontes son reconocidos e incluso transitados por un gobierno. La profundización de la afinidad se articula al ritmo en que la relación se hace más sustantiva y comienza a contemplar mecanismos de dependencia material.

El gobierno de Kirchner y el Movimiento Barrios de Pie

La conmemoración del estallido social de diciembre de 2001 realizada cuatro años más tarde presentó claras distinciones entre los grupos que apoyan al gobierno de Néstor Kirchner y aquellos que sostienen posiciones críticas a su respecto. De hecho, los primeros realizaron su acto el día 19, tajantemente separados de cualquier medida general que se tomara al día siguiente. Allí, los organizadores, entre los que resalta como uno de los más relevantes el MBP expresaron: “Hoy tenemos un gobierno que se preocupa por el pueblo porque es producto de la lucha popular”, al tiempo que remarcaron la importancia de la integración regional latinoamericana¹¹, leída en términos de articulación entre los diferentes gobiernos de la región.

Esto significa que a poco más de dos años de la asunción de este gobierno, puede verse una casi plena identificación con su orientación política. Lo que intentaremos desglosar ahora es cómo se ha ido construyendo dicha empatía, intentando observar los planos simbólicos y materiales sobre los que se sustenta.

En primer lugar, como fue mencionado, la afinidad surge del discurso “nacional” del gobierno construido fundamentalmente en oposición a la década de 1990, intentando retomar banderas “clásicas” del peronismo. En este sentido, tal como lo expresa la declaración recién citada, el propio gobierno es visto como producto de la lucha de los sectores populares contra el modelo neoliberal, de allí que movimientos como el MBP ni siquiera se conciban como externos al gobierno, sino como parte de su base social. Aquí cabe aclarar una circunstancia que refuerza esta cuestión. La llegada de Kirchner al gobierno estuvo caracterizada por cierta debilidad y dependencia política (tanto por el escaso 22% que obtuvo en las elecciones como por su innegable rótulo de “candidato de Duhalde”), lo que lo urgió a construir un esquema que contemplara una base propia de poder, en el cual juegan un papel importante los piqueteros “oficialistas”¹².

Así, a lo largo de los primeros meses de gobierno, el apoyo fue cada vez más explícito, al tiempo que crecía el enfrentamiento con el duhaldismo y se tomaban diversas medidas que recuperaban algo de los reclamos que estallaron en 2001 (aquí debe subrayarse la política de derechos humanos y cierto discurso de enfrentamiento para con los organismos multilaterales de crédito y otros tenedores de deuda argentina).

Quizá uno de los momentos cumbre del acercamiento entre el MBP y el gobierno de Kirchner haya sido el acto celebrado en Parque Norte en junio de 2004 como parte de la articulación de los espacios “transversales” de apoyo al Presidente. En el documento central de dicho acto, con presencia de altos funcionarios del gabinete del Poder Ejecutivo, pueden leerse sentencias como las siguientes:

“Porque somos conscientes de que el rumbo emprendido [por el gobierno] se inscribe en la confrontación histórica con el imperialismo y las clases dominantes que sustentan sus intereses en nuestro país. En esta contienda, hoy como ayer, coincidimos con Evita en que a la fuerza brutal de la antipatria, le oponemos la fuerza popular organizada”

Más abajo se lee:

“Nos anima el propósito de poner la movilización y la organización popular en función de impulsar con éxito cambios económicos y sociales más profundos y duraderos. Cambios que sólo podremos alcanzar si somos capaces de construir unidad de concepto y acción entre el gobierno y las fuerzas populares (...)” (“Por una Patria para todos”, documento a discutir en el Acto público del 21 de junio de 2004, Parque Norte, Buenos Aires, citado en Svampa y Pereyra, 2004).

Se trata de la misma época en que se comienza a dar una creciente incorporación de diferentes cuadros del MBP a cargos gubernamentales. Aún cuando el caso de Jorge Ceballos es emblemático por ser el referente del movimiento, el proceso no se agota, ni por lejos, allí. En 2006, por ejemplo, en cumplimiento de acuerdos pre-electorales, el área de políticas sociales de al menos tres municipios de la provincia de Corrientes ha quedado a cargo de la organización, situación que no sólo implica la adquisición de cargos sino, sobre todo, la posibilidad de incidencia en áreas de decisión política muy vinculadas a programas concretos de asistencia social. Situaciones similares ocurren en varias provincias más del territorio nacional. Es difícil estimar un número a nivel nacional, provincial y municipal pero puede arriesgarse que más de una centena de funcionarios de diverso orden son parte del MBP o, en su defecto de Patria Libre.

En palabras de un referente de Patria Libre, hoy en Libres del Sur, el proceso de acercamiento del MBP al gobierno tiene varias aristas: intenta expresar la capacidad del campo popular de arrancar concesiones a un Estado más permeable que el de la década anterior, intenta aprovechar el capital simbólico que Kirchner acumula en aquellas cosas

con las que el movimiento coincide (disputa con FMI, militares, etc.). En este caso, no es tan relevante para el movimiento si es retórico o real, como la brecha que se abre para plantear estos temas como elemento de trabajo sobre el campo popular.

El caso del MBP expresa una tensión entre las posibilidades que abre un gobierno “progresista” y, al mismo tiempo, los límites que encierra. Para analizar y realizar un balance de esta compleja relación podríamos tomar dos elementos: por un lado, las posiciones de los propios actores y, por el otro, los efectos más generales de las políticas del gobierno en relación con los movimientos sociales; tanto sobre el propio MBP como sobre los vínculos y la capacidad de coordinación en el seno del campo popular. En el primer caso, tanto los documentos consultados como las entrevistas realizadas expresan una clara conformidad con las opciones políticas tomadas por el movimiento. Se coincide en que la organización ha crecido en peso y presencia en el campo popular y que su integración al gobierno “nos hace más conocidos, despierta simpatías y genera atractivo”. Al mismo tiempo, se subraya la experiencia que se está acumulando en términos de gestión en puestos de gobierno. En tal sentido, las proyecciones son optimistas y hablan de un posible “salto” cualitativo para los próximos años. Dirigiéndonos hacia el segundo elemento de análisis planteado, son los propios entrevistados y documentos quienes dan cuenta de dos problemas centrales que se juegan en la relación con el gobierno: la *autonomía* y la *relación con otros actores del campo popular*. En el primer caso, se coincide en que se trata de un elemento central de toda construcción popular pero que, al mismo tiempo, debe ser rediscutida a la luz de los sucesos contemporáneos. La autonomía es, de alguna manera, *inscripta* en la relación con el gobierno: “estamos ocupando espacios desde la gestión de este gobierno que coincidimos en un montón de cosas y en otras no... creemos en la autonomía que hay que tener para saber plantear lo bueno y lo malo, somos parte pero somos autónomos porque decimos qué es lo que nos parece”. La autonomía es pensada dentro de una problemática que no se cuestiona *per se* la disputa *en* el gobierno ni el problema del Estado, sino los márgenes de oscilación entre la iniciativa propia y la adscripción a las políticas oficiales. Como vimos, la afinidad aparece ligada a la recuperación de ciertas banderas por parte del gobierno que producen identificación en consignas del movimiento y del campo popular en general. A partir de allí, se revisan las consideraciones previas acerca del Estado y, dando por iniciada una nueva etapa, se apuesta por pelear desde el interior del mismo, considerando que allí hay mayor potencialidad que manteniéndose a distancia. En tal sentido, el eje adentro/afuera del Estado del cual buena parte de la izquierda es acusada de sobrevalorar es desplazado por un eje funcional/no funcional, donde la lucha que involucra asunción de cargos ejecutivos e identificación con el gobierno puede ser más disruptiva y constructiva que posiciones extremas o de aislamiento “anti-institucional”. Así la autonomía es ahora una cuestión de acuerdos o desacuerdos con tal o cual medida de gobierno. Por ello reaparecieron los ejemplos de la oposición del MBP tanto a la reelección del Gobernador Rovira en la provincia de Misiones como a la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires, ambos eventos en los que el gobierno estaba interesado. En resumen, la autonomía es la que se puede imponer, vale decir, está supeditada a la correlación de fuerzas y el MBP considera que su construcción tiene como proyecto crecer en tal sentido, aún cuando requiera momentos en que su integración al gobierno parezca casi total e incluso produzca dificultades políticas ligadas con la asimetría desde la cual se busca construir transacciones con el gobierno, ejemplificadas por la salida de Ceballos del Ministerio de Desarrollo Social luego de que su candidatura en el municipio de La Matanza no fuera refrendada por Néstor Kirchner, a favor de un postulante propio del aparato justicialista tradicional (vale aclarar que una vez pasadas las elecciones, que obviamente favorecieron al candidato justicialista,

Ceballos volvió a su antiguo cargo por ofrecimiento de la nueva presidenta Cristina Kirchner).

Este último punto nos lleva a la cuestión de la situación general del mapa de movimientos sociales y el modo en que el gobierno opera en tal sentido. La relación del MBP con otros sectores políticos considerados de izquierda se ha visto modificada de manera sustantiva a partir de su afinidad con el gobierno. A la luz de los años que siguieron a diciembre de 2001, es claro que el campo de organizaciones populares en un sentido amplio ha recorrido múltiples fragmentaciones, algunas ligadas con una cultura política ya arraigada en la izquierda argentina y muchas otras con los posicionamientos políticos y las relaciones establecidas con el gobierno: si bien los propios entrevistados admiten que “Kirchner rompe el campo popular”, consideran que eso se debe a las definiciones que hay que tomar. Y dados los presupuestos políticos y la tradición del MBP, la apuesta es por el acercamiento al gobierno, a partir de la convicción de que allí se puede operar de manera más certera en pos de los objetivos del campo popular y no sólo de su propia organización. De manera que la relación con la izquierda va debilitándose al punto de constituirse como una entidad externa: la “izquierda” pasa a ser una categoría que define otros actores y que suele caracterizarse por ver las cosas “blanco o negro”, esto es, por llevar adelante una política que si es de oposición es homologable a la oposición de derecha al gobierno. Al margen de que, tal como lo analizamos anteriormente, algunos sectores de la izquierda -sobre todo partidaria- confluyan en sus críticas al gobierno con voceros de la derecha neoliberal, es curioso que sea el MBP, que incluso compartió en muchas ocasiones la calle con esos sectores, el que recoja esta crítica. Vale decir, es de suponer que el propio gobierno plantee la situación en estos términos, pero cabría preguntarse si no hay algo en el orden de la autonomía de las organizaciones populares que se está sacrificando cuando se hace empatía con ese discurso. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de allí se inaugura una fragmentación en el seno del campo popular que supone incluso la disputa de los espacios simbólicos (“disputar a la izquierda las calles”, según reza un documento de la organización) y que, en conjunto, reduce la capacidad general de movilización de los sectores subalternos.

El “gobierno en disputa”

Los documentos, discursos públicos y entrevistas a miembros de la organización permiten pensar en un eje directriz de las prácticas de la organización en los últimos años. Se trata de la idea de que el gobierno de Kirchner abre una etapa de disputa por inscribir transformaciones de la correlación de fuerzas sociales a nivel estatal, lo que al mismo tiempo tiene una potencial repercusión en la sociedad en su conjunto. La centralidad del Estado como articulador de la formación social –tal como vimos, con su particular expresión en América Latina- es, en este punto, un elemento central de la lectura del MBP respecto de la coyuntura actual. En ese sentido, dar cuenta de ello produce efectos mucho más fortalecedores para las organizaciones que empalmen sus políticas en esta dirección que para aquellas que se preservan sosteniendo críticas respecto del carácter “retórico” de los cambios emprendidos por gobiernos de tinte “progresista”. Tal es el caso del MBP, que reconoce esto sobre una base que podría plantearse en dos planos: por un lado, la idea de “construir unidad de concepto y acción entre el gobierno y las fuerzas populares”. El MBP se sitúa a sí mismo como parte de esas fuerzas populares que se asumen como necesarias para la concreción efectiva de los proyectos transformadores que el gobierno pueda pretender. Por otro lado, aparece la cuestión de orden estratégico: los propios entrevistados se describieron “sorprendidos” por el discurso confrontativo de los primeros meses de gestión de Kirchner (de hecho la

organización había llamado a votar en blanco). El hecho de que el gobierno retomara reclamos muy fuertemente planteados en los últimos años por el campo popular – derechos humanos, Corte Suprema, relación organismos internacionales, etc.- abre la posibilidad de profundizarlos y trabajarlos de cara a la sociedad. En torno de esto último es donde se constituye la idea del “gobierno en disputa”.

Ante todo, la posibilidad de la afinidad se funda en la existencia de una tradición compartida. Aquí se observa un peso muy fuerte de la dimensión simbólica de toda lucha social. La “liturgia” *nacional y popular* propia de los discursos de gobierno es el punto de partida para producir las condiciones de posibilidad de la relación misma. Desde allí renacen las concepciones políticas más ligadas al peronismo revolucionario de la década del setenta: el gobierno es vivido como un ámbito privilegiado de la disputa social. Incluso sus diferentes miembros expresarían proyectos políticos en pugna y resulta imprescindible la participación popular para torcer esa disputa hacia posiciones progresivas. De modo que la lectura política del MBP concibe al gobierno actual como un espacio de *condensación* de contradicciones que pocos años antes se sostenían entre el Estado y las organizaciones populares en el seno de la sociedad civil, como entidades ajenas entre sí. En este punto, quizá aparece una lectura que no enfatiza en los límites de la disputa al nivel del Estado y sí en sus potencialidades. Además, cabría preguntarse por las condiciones históricas específicas de esta disputa en relación con épocas anteriores, tanto en el plano internacional (¿qué márgenes brinda el Estado para la construcción del “proyecto nacional”?) como en lo relativo a la movilización social (¿en qué medida puede construirse una movilización social que efectivamente *tuerza* el rumbo del gobierno hacia posiciones más radicalizadas?). Obviamente, se trata de preguntas abiertas, cuya respuesta no es otra que el devenir de la propia lucha, pero que son estructurantes de buena parte de la disposición actual del mapa de movimientos sociales en la Argentina.

Conclusiones

Vemos entonces que una de las dimensiones a través de las cuales las políticas del presente gobierno afectaron la organización de los movimientos piqueteros es el eje de lo que podríamos denominar *tradición*. Los movimientos que provienen del amplio espectro (casi indefinible, por cierto) del “nacionalismo revolucionario”, que incluye a parte del peronismo, cuentan con otros condicionantes a la hora de acercarse a un gobierno. Dicho de otro modo, la especificidad de sus análisis coyunturales se asienta más en el eje Imperialismo-Nación que en la confrontación clasista en sus términos tradicionales. Si bien se trata de una presentación esquemática de la cuestión (y de estos grupos), lo central es que este tipo de lecturas redundan en una toma de posición respecto del Estado que dista de la que toma la izquierda más ortodoxa. En este trabajo, por el alcance que pretende, no desarrollamos las consideraciones sobre el Estado de los diferentes grupos que reconocen precedente en diferentes vertientes del nacionalismo de izquierda. Alcanza, por el momento, con aclarar que no se lo sopesa prioritariamente como un factor que coadyuve a la dominación capitalista *per se*, sino más bien en su relación con el imperialismo (cuán penetrado se encuentra, etc.). Al mismo tiempo, se reconoce su productividad histórica en la vida de los sectores trabajadores de los países periféricos (material y simbólicamente), por medio de la reivindicación, más o menos intensa según el grupo, de los procesos “populistas”. De allí que no sólo no se rechace al Estado de antemano, sino que se lo considere una instancia privilegiada de articulación y construcción de un proyecto alternativo de país, incluso en términos de socialismo (amén

de que el lenguaje de los documentos y declaraciones públicas del MBP haya perdido tal significante en los últimos años).

Como mencionamos en el cuerpo del trabajo, la noción algo difundida de “cooptación” nos parece insuficiente para el análisis de los movimientos que se han acercado al gobierno de Kirchner. Ella supone ante todo una profunda subestimación de dichos espacios y anida en una crítica *externa* que no se detiene en los condicionantes de esa relación sino en valores propios de quien caracteriza. Es cierto que la afinidad pone en movimiento mecanismos de transferencia de recursos materiales, básicamente en términos de cargos y agencias estatales ocupadas por estas organizaciones. Sin embargo, no debe derivarse de ello una idea simple de intercambio de favores. No al menos si no partimos de una oposición binaria entre Estado como instrumento de opresión y organizaciones como expresión emancipatoria. Los aparatos estatales expresan correlación de fuerzas a nivel social y, en tal sentido, constituyen la dimensión *contradictoria* del Estado. Esperamos haber dejado claro que no son neutrales, pero que tampoco es irrelevante quién los ocupe y el modo en que sean gestionados (un tema de investigación que se abre a partir del presente trabajo es, así, la transformación en la fisonomía y la práctica estatal a partir de la incorporación de organizaciones de origen popular en la gestión pública). En todo caso, allí es donde se inscribe la disputa dada por el MBP.

Y estamos, ante todo, frente a una disputa eminentemente simbólica. El punto donde mayor productividad parece guardar para sí es en la centralidad *histórica* que el Estado asume en las luchas sociales en Argentina y América Latina. Sin embargo, ello supone también un momento fuerte de compromiso que dificulta la problematización en torno de la autonomía como *garantía* de los procesos de transformación social. En los Estados periféricos ocurre a menudo que los sectores económicamente dominantes no logran una representación política que los contenga, en buena medida por la fuerza con que allí se producen enfrentamientos entre sectores burgueses locales y extranjeros. Cuando los segundos dominan en desmedro de los primeros, pocas veces logran construir una hegemonía civil, a ello también pueden atribuirse las constantes irrupciones del “partido militar”. Por su parte, las burguesías locales cuentan con una menor fuerza pero con una capacidad infinitamente mayor de interpelar a los sectores populares. La disputa por el poder político, entonces, supone la búsqueda de mayor independencia respecto de sectores foráneos, máxime en momentos en que los intereses de ambos parecen irreconciliables. En esos casos se evidencia lo que Trotsky (2000)¹³ denominaba “carácter bonapartista *sui generis*” de los gobiernos populistas latinoamericanos –analizando el caso particular del cardenismo mexicano-. Ellos requieren la activación de las masas para llevar adelante proyectos que tensan la relación con sectores antes económicamente dominantes. A esta altura de la historia latinoamericana, esto parece un hecho de la realidad. Por ende la pregunta no es del orden de lo deseable sino de las condiciones en que esto sucede. Lo cierto es que esta interpelación supone siempre una potencialidad, pero al mismo tiempo un límite, pues dicha activación tenderá siempre a tener un carácter *controlado*. Así, llegamos nuevamente a la autonomía. Ella no supone rechazar estas condiciones sino problematizarlas. Las alternativas no deben reducirse al aislamiento del acontecer social, por un lado, o la plena integración, por el otro.

En cualquier caso, a modo de reflexión final, uno de los grandes interrogantes y desafíos para cualquier forma política que se pretenda emancipatoria en un sentido fuerte parece ser la relación que se establece con el Estado. Y no es éste un problema moral o un debate entre posiciones asépticas y negociadoras. El Estado es una de las expresiones más cabales del modo de existencia de la sociedad capitalista. Pero, en tanto instancia de

articulación, es él mismo una forma institucional contradictoria. Su crítica, por ende, es bien compleja, pues las consecuencias políticas de la concepción de Estado que una organización tenga juegan un rol protagónico en las potencialidades transformadoras de la misma. Por ello, se trata de un juego de finas tensiones donde, desde nuestro punto de vista, el concepto de *autonomía* debe jugar un rol central. La autonomía debe ser pensada como una tensión que no pretende resolverse sino inaugurar nuevas tensiones. La plena autonomía de los sectores subalternos es, en última instancia, imposible de realizar en la sociedad capitalista (por su propio carácter de *subalternos respecto de*). Desde un punto de vista opuesto, el capitalismo produce modos de integración (políticos, culturales, etc.), que por definición no pueden nunca ser plenos, pues se trata de una sociedad, tal como decía Gramsci “lacerada por contradicciones internas”, pero que pueden apaciguar las más diversas formas de resistencia. Por ello, la autonomía es un proceso permanente de disputa ante las tendencias integradoras. En cuanto tal, y al menos hasta la superación del sistema capitalista, sólo puede tener por objeto la apertura de nuevas preguntas, interrogantes y tensiones que pongan en duda la inexorabilidad del presente.

Notas

*Licenciado en Ciencia Política y Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) y del Centro Cultural de la Cooperación.

[1] El análisis de Marx (2000), presente en el capítulo VIII del tomo I de *El Capital*, respecto de las leyes laborales es demostrativo de esta concepción. Allí el Estado, en pos de resguardar las condiciones generales de la acumulación atenta contra los intereses inmediatos de los burgueses individuales por extender la jornada de trabajo a fin de extraer una mayor plusvalía absoluta.

[2] Esta cuestión puede graficarse con la desarticulación de la faceta bienestarista del Estado. En este caso, la izquierda aparece defendiendo aparatos estatales (seguridad social, etc.) que la derecha intenta desarticular. Comprendiendo de manera dialéctica al Estado, esta aparente paradoja no es tal.

[3] Presentamos el ejemplo de la “acumulación originaria”, pues la interpretación de ese proceso tiene consecuencias políticas de primer orden a la hora de concebir el conflicto en la sociedad capitalista. Una noción meramente histórica supondría que la separación entre trabajadores y medios de producción es un hecho *ya consumado* (por ende un punto de partida), mientras que entenderla como un proceso permanente –la necesidad de producir y reforzar constantemente dicha separación– pone a la orden del día la violencia inscripta en propio desarrollo del capitalismo. Al mismo tiempo, procesos actuales como el despojo de derechos colectivos y bienes comunales en el caso de comunidades indígenas supone la reedición contemporánea de la “acumulación originaria”. Respecto de este tema pueden consultarse, entre otras fuentes, textos de David Harvey (2006) y de Massimo de Angelis (1999).

[4] Adelantamos aquí que descartamos una noción vulgar de cooptación, que resulta un tanto maniquea para procesos que parecen tener un arraigo más profundo que la mera “seducción”. Este concepto sugeriría un elemento activo y uno pasivo, uno que coopta y otro que *es cooptado*. De este modo, supone una subestimación sobre este último, ya que no considera las razones inmanentes de su acción sino sólo en relación con el poder del

otro. Proponemos aquí una idea más compleja de cooptación, no ya de un movimiento o actor particular sino del conflicto en términos generales. Tal es el modo en que puede pensarse a partir del conocido trabajo de Oscar Oszlak *La Formación del Estado argentino* (1982). Allí, es condición para el nacimiento del Estado (hoy podríamos decir, para su constante reafirmación) la institucionalización de un orden, esto es, la capacidad de internalizar el conflicto social, apareciendo como única autoridad de la vida social organizada. Aunque pensados para los orígenes de la formación estatal nacional, estos desarrollos valen también para nuestro presente, ya que dan cuenta de invariantes en la relación Estado - Sociedad que en momentos de crisis y reordenamiento de los límites entre ambos, como estos últimos años, alcanzan una notoria evidencia. En este orden se inscribe la llamada “dimensión cooptativa” en la conformación del Estado, consistente en la captación de sectores dominantes del interior del país que coadyuvó a la consolidación del mismo. Algo de eso puede pensarse en nuestra actualidad. La captación de algunos movimientos piqueteros es la forma que asume la cooptación del conflicto social hoy. Philip Selznick (1997), un poco conocido estudioso norteamericano de la administración pública, define a la cooptación como el proceso de absorber nuevos elementos “en el liderazgo o en la política” como medio de evitar amenazas a la estabilidad o existencia del sistema. Algo semejante es lo que se da actualmente entre el gobierno de Kirchner y los movimientos piqueteros que, a su vez, produce modificaciones en el Estado en su conjunto, ya que modifica la fisonomía, el personal y el tipo de acción de sus aparatos.

[4] El caso del gobierno de Kirchner nos provee interesantes aportes en esta dirección. Si bien intentaremos demostrar que lo que allí predomina es la cooptación del conflicto, el proceso de criminalización de distintas expresiones de protesta (precisamente, aquellas más reticentes a la integración) es un caso de represión aunque no en el sentido más fuerte del término (violencia física), mucho más presente en la década del 90.

[5] Múltiples trabajos han analizado la tensión presente, por ejemplo, en los planes sociales. Su posibilidad de resignificación comunitaria y la dependencia del Estado son los dos polos del problema aquí planteado. Ver, por ej. Freytes Frey y Cross (2005) y Montes Cató et al (2005).

[6] Otro caso, aún más polémico, es el de las indemnizaciones que el Estado ha pagado a familiares de víctimas de la última dictadura. Sin intención de juzgar el acto de recibirlas, desde el punto de vista del Estado se está poniendo valor monetario a vidas que expresaban, en tanto fuerza social y de diversos modos, una alternativa al capitalismo y, por ende, al propio Estado.

[7] El caso argentino es ilustrativo: el exterminio es lo que articula la posibilidad de un mercado nacional y, a partir de allí, de la constitución de un Estado en un sentido fuerte. Aquí la violencia fue la *madre* y no sólo la partera de la nueva sociedad. La llamada “conquista del desierto” fue comandada por un general que también era terrateniente, y financiada por adelantado por quienes iban a adquirir las tierras que se liberarían del yugo indígena. Es decir, el mercado nacional y la consolidación del Estado son al mismo tiempo el afianzamiento de una clase dominante nacida en estrecha vinculación con el Estado. La historia argentina ha actualizado ejemplos como éste más de una vez, no se trata de una efeméride (el apagón en Ledesma -en una noche donde fueron desaparecidos los delegados fabriles y demás activistas de la ciudad-, durante la última dictadura militar, realizado desde el interior del ingenio puede ser otro caso).

[8] Es conocido el final de la Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho, texto de 1844, en que el concepto de “proletariado” es utilizado por primera vez por Marx. Dice el autor: “La cabeza de esta emancipación es la filosofía; su corazón, el proletariado” (Marx, 1965: 48). Persiste aquí un dualismo que el autor sólo romperá

meses luego superándolo por medio del concepto de praxis a partir de la experiencia del propio proletariado y no de una misión a él adjudicada por la filosofía.

[9] Movimiento Barrios de Pie: “Qué es y qué hace el Movimiento Barrios de Pie”, www.barriosdepie.org

[10] La relación entre Barrios de Pie y Patria Libre es similar, aunque no idéntica, a la existente entre las agrupaciones piqueteras dependientes de Partidos de Izquierda y éstos últimos. La diferencia radica en que el trabajo barrial es una tradición muy arraigada en la Corriente Patria Libre, mientras que en los otros casos, las organizaciones piqueteras fueron creadas por los Partidos una vez que se evidenció su potencialidad política. En este sentido, mientras sí puede decirse que CPL es la expresión partidaria o política de Barrios de Pie, no puede decirse que la existencia de éste último sea solamente un “brazo barrial” del primero. Hoy, tanto el MBP como CPL son parte de “Libres del Sur”, un movimiento que agrupa a algunas organizaciones peronistas más y que se expresa claramente en apoyo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

[11] Clarín, 20/12/2005.

[12] No es tema de este trabajo indagar en la composición de dicho esquema, pero está claro que los piqueteros “oficialistas” constituyen solo una parte, con cierto peso en el disciplinamiento del resto de los sectores populares. Pero esto no implica que ellos sean los más favorecidos por el gobierno de Kirchner. Antes bien, debe pensarse fundamentalmente en los sectores exportadores privilegiados por el tipo de cambio alto.

[13] Es interesante la caracterización de Trotsky de la necesidad de que los sectores subalternos preserven la iniciativa en los procesos en que confluyen coyunturalmente con el gobierno. Sin embargo, su conclusión -que el partido, o la cuarta internacional en el caso específico que analiza, debe disputar con el gobierno y hegemonizar a las masas- requiere, al menos, ser discutida en nuestros días. En ese sentido, el concepto de *autonomía* resulta más englobador para una época en la que la forma específica que la iniciativa debe tomar no parece estar tan clara.

Bibliografía

- Althusser, Louis 1997 (1969) “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en Althusser, Louis *La filosofía como arma de la revolución* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Aricó, José 1982 *Marx y América Latina* (México DF: Alianza Editorial).
- Benjamin, Walter 1995 *Para una crítica de la violencia* (Buenos Aires: Leviatán).
- Borón, Atilio 2005 “Reflexiones en torno al gobierno de Néstor Kirchner”, en *Periferias* (Buenos Aires: FISyP) N° 12.
- Castells, Manuel 2000 *Movimientos sociales urbanos* (México DF: Siglo XXI).
- Colectivo Situaciones 2002 *La hipótesis 891. Más allá de los piquetes* (Buenos Aires: Ediciones De Mano en Mano).
- De Angelis, Massimo 1999 “Marx’s Theory of Primitive Accumulation: a Suggested Reinterpretation”. Extraído el 20 de enero de 2007 del Sitio Web de Massimo de Angelis: <http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm>
- De Sousa Santos, Boaventura 2001 “Los nuevos movimientos sociales”, en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5.
- Delfini, M. y Picchetti, V. 2004 “De la fábrica al barrio y del barrio a las calles. Desempleo y construcción de identidades en los sectores populares del conurbano bonaerense”, en Battistini, Osvaldo (comp.): *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores* (Buenos Aires: Prometeo).

- Elías, Antonio 2006 “Ante la expansión capitalista y la retórica progresista: una agenda de cambio institucional”, en Gambina, J. y Estay, J. (comp.): *¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y el Caribe* (Buenos Aires: FISyP).
- Engels, Federico 1970 *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado* (Cártago: Buenos Aires).
- Evers, Tilman 1989 *El Estado en la periferia capitalista* (México: Siglo XXI).
- Fernández, Arturo 1991 *Movimientos sociales en América Latina* (Buenos Aires: Aique - Instituto de Estudios y Acción Social).
- Ferrara, Francisco 2003 *Más allá del corte de rutas. La lucha por una nueva subjetividad* (Buenos Aires: La rosa blindada).
- Foucault, Michel 1992 *Genealogía del racismo* (Buenos Aires: Altamira).
- Freytes Frey y Cross, Cecilia 2005 “Políticas sociales y tradiciones ideológicas en la constitución de los movimientos de trabajadores desocupados”. Ponencia presentada en el 7^{mo} Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, agosto.
- Gramsci, Antonio 2003 *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Grüner, Eduardo 1994 *Las formas de la espada*. (Buenos Aires: Colihue).
- Harvey, David 2006 *El nuevo imperialismo. Acumulación por desposesión. Texto y entrevistas* (Buenos Aires: Piedras de Papel).
- Holloway John 1994a “La ciudadanía y la separación de lo político y lo económico”, en Holloway, John *Marxismo, Estado y Capital* (Buenos Aires: Fichas temáticas de Cuadernos del Sur).
- Holloway, John 1994b “El Estado y la lucha cotidiana”, en Holloway, John *Marxismo, Estado y Capital* (Buenos Aires: Fichas temáticas de Cuadernos del Sur).
- James, Daniel 2006 *Resistencia e integración. La clase obrera y el peronismo 1943-1976* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Lechner, Norbert 1984 “Especificando la política”, en Juan Enrique Vega (coord.) *Teoría y política de América Latina* (México DF: Libros del CIDE).
- Lenin, Vladimir 1974 (1917) *El Estado y la Revolución*. (Buenos Aires: Polémica).
- Löwy, Michael 1972 *La teoría de la revolución en el joven Marx* (México DF: Siglo XXI).
- Marx, Karl, 1965 (1844): *Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción* (Buenos Aires: Ediciones Nuevas).
- Marx, Karl, 1967 (1859): *Introducción General a la Crítica de la Economía Política*. (Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presente).
- Marx, Karl, 2000 (1867): *El Capital*. (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica) Tomo I.
- Mazzeo, Miguel 2004 *Piqueteros*. (Buenos Aires: FISyP-Manuel Suárez editor).
- Melucci, Alberto 1994 “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en *Zona Abierta* (Madrid: Zona Abierta) N° 69.
- Merklen, Denis 2005 *Pobres ciudadanos* (Buenos Aires: Gorla).
- Montes Cató, Juan; Diana Menéndez, Nicolás; Crivelli, Karina 2005 “La gestión de los planes sociales en las organizaciones de desocupados en la Argentina”. Ponencia presentada en el XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Porto Alegre, agosto.
- Offe, Claus 1988 *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales* (Madrid: Sistema).
- Oszlak, Oscar 1982 *La formación del Estado Argentino* (Buenos Aires: Editorial de Belgrano).
- Poulantzas, Nikos 1991 *Estado, poder y socialismo* (Siglo XXI, México).

- Rajland, Beatriz y Campione, Daniel 2006 “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de los últimos años: novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en López Maya, Margarita (comp.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Schuster, Federico 2004 "Izquierda política y movimientos sociales en la Argentina contemporánea", en P. Barrett y C. González (comp.), *La izquierda latinoamericana* (Buenos Aires: Norma).
- Selznick, Philip 1997: “El mecanismo de cooptación”, en Shafritz, J. y Hyde, A. (comp.): *Clásicos de la administración pública* (México: Fondo de Cultura económica).
- Sonntag, H. R. 1977 “Hacia una teoría política del capitalismo periférico”, en Sonntag, Heinz y Valecillos, Héctor (comp.): *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (México: Siglo XXI).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2004 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).
- Therborn, Goran 1997 *¿Cómo domina la clase dominante?* (México: Siglo XXI).
- Thwaites Rey, Mabel 2005 “Estado: ¿qué Estado?”, en M.Thwaites Rey y A. López (comp.): *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*. (Buenos Aires: Prometeo)
- Trotsky, León 2000 *Escritos Latinoamericanos*. (CEIP: Buenos Aires).
- Vega, Juan Enrique 1984 “Política y Estado. Apuntes e hipótesis para una reflexión sobre sus interrelaciones” en Juan Enrique Vega (coord.): *Teoría y política de América Latina* (México DF: Libros del CIDE).
- Zavaleta Mercado, René 1988 “La burguesía incompleta”, en Zavaleta Mercado, René *Clases Sociales y Conocimiento* (La Paz: Los Amigos del Libro).
- Zavaleta Mercado, René 1990 *El Estado en América Latina* (La Paz: Los Amigos del Libro).

Otras fuentes:

Documentos y boletines de MTD Aníbal Verón, Movimiento Barrios de Pie y Corriente Patria Libre

Página Web Movimiento Barrios de Pie www.barriosdepie.org.ar

Página Web Diario Clarín www.clarin.com

Página Web Diario Página/12 www.pagina12web.com.ar